

La destrucción de dos plataformas iraníes por EE.UU. ¿un nuevo supuesto de represalia armada lícita?

JAVIER A. GONZÁLEZ VEGA*

I. INTRODUCCIÓN

El día 19 de octubre de 1987, unidades de la armada norteamericana destacadas en el Golfo Pérsico procedían a bombardear dos plataformas petrolíferas iraníes del campo petrolífero de Rostam. La operación, consistente en la descarga —durante más de 85 minutos— de más de 1000 proyectiles de 127 mm, fue desencadenada por cuatro buques situados en las proximidades de las estructuras. Esta acción había sido precedida de la advertencia de desalojo de las plataformas, concediendo un plazo de 20 minutos para su evacuación; merced a esta medida, la acción no registró víctimas. Concluida la operación, las plataformas Risalat y Reshadat habían quedado totalmente destruidas. Las ulteriores declaraciones de medios oficiales norteamericanos conceptuaban la acción como respuesta al bombardeo —en días anteriores— por Irán de dos buques mercantes norteamericanos¹.

La acción que reseñamos podría constituir un capítulo más en la ya larga serie de incidentes registrados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto irano-iraquí en las postrimerías del año 1980. Sin embargo, las características de la acción norteamericana [su minuciosidad, el carácter limitado y localizado de la misma, el no haber afectado a la soberanía territorial iraní...], la ausencia de reacciones adversas a la misma detectable en la comunidad internacional, los argumentos esgrimidos por los Estados Unidos calificando a la acción, ya como ejercicio del derecho de legítima defensa, ya como acción de represalia —con el inconvenien-

*Departamento de Derecho Internacional Público, Universidad de Oviedo.

te, en este último caso, de su aparente proscripción por el Derecho internacional—parecían hacer necesario el análisis que aquí presentamos. En todo caso, al comprometer este incidente cuestiones relativas a la prohibición del uso de la fuerza, recientemente reiterada por el Tribunal Internacional de Justicia, la oportunidad resulta evidente.

La consideración de este supuesto exige el que analicemos la acción norteamericana a la luz del derecho de legítima defensa, en un segundo momento, procederemos a considerar el derecho de represalias en su configuración tradicional y en sus desarrollos actuales con miras a calificar la operación norteamericana, ofreciendo en último término los resultados de nuestro análisis.

II. EXAMEN DE LOS ARGUMENTOS EMPLEADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN

El presidente de los Estados Unidos manifestó en unas declaraciones informales efectuadas a la prensa al conocerse la acción, que la misma se había efectuado en «*ejercicio del derecho de legítima defensa* establecido por las Naciones Unidas»² (sic), calificándola de «prudente e incluso limitada respuesta a la agresión iraní».³ El Secretario de Estado no efectuó declaraciones al respecto; en cambio, el Secretario de Defensa manifestó: «no deseamos ulteriores confrontaciones con Irán, pero estaremos preparados para responder a cualquier escalada de acciones militares por Irán, con *contramedidas más duras*».⁴ Posteriormente en una entrevista ante la televisión advirtió que «quizá sean necesarias *nuevas represalias* contra Irán».⁵ En un ulterior comunicado, la Casa Blanca insistió en que «la respuesta militar se produce después de repetidas advertencias a Irán —a través de la Embajada suiza en Teherán, que se encarga de los intereses norteamericanos— de que cesara la agresión contra objetivos de Estados Unidos y de que podía *sufrir represalias*».⁶ La prensa recogía la configuración de la acción como una medida de represalia («*measure of retaliation*»). Dos han sido, pues, los argumentos esgrimidos para justificar la acción, si bien la conceptualización de la misma como ejercicio del derecho de legítima defensa ha sido abandonada en sucesivas declaraciones. Empero, el hecho de que haya sido aducido exige que en nuestro análisis incidamos en la consideración de este argumento.

1. El argumento de la legítima defensa

Habiendo sido alegado el que la acción había constituido ejercicio del derecho de legítima defensa establecido por las Naciones Unidas, se hace necesario confrontar la regulación del mismo establecida en la Carta con las circunstancias que configuran la acción norteamericana. A este respecto, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece:

«Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de

Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

Este artículo «permite el empleo de la fuerza en reacción a un ataque armado, a condición de que se observen las normas procedimentales, que prescriben que el Consejo de Seguridad sea inmediatamente informado de la acción armada en legítima defensa».⁷ Advertimos como requisito «sine qua non» la exigencia de que se haya producido un ataque armado del que la acción en legítima defensa será contestación; nos encontramos, pues, con un «uso defensivo de la fuerza armada con objeto de impedir que tenga éxito el ataque armado de otro sujeto y hasta tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales».⁸ Algunos autores exigen de la medida adoptada que contenga las notas de provisionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad;⁹ para otros autores los requisitos exigidos serían los de inmediatez, efectividad y proporcionalidad de la acción;¹⁰ por último, algún autor ha pretendido que el artículo sólo es aplicable respecto de situaciones que entrañen graves violaciones de la paz.¹¹

En lo que atiende al requisito del ataque armado, es obvio que puede calificarse de tal las acciones iraníes contra buques de pabellón norteamericano, que los órganos de este Gobierno conceptuaron como causa de la medida adoptada en reacción. A este respecto la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General que contiene la definición de la agresión, conceptúa como «acto de agresión»:

«Artículo 3... se caracterizará como acto de agresión:

... d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

Sin embargo, distinto juicio nos merece el requisito de la inmediatez. Conforme a esta exigencia, la acción en legítima defensa debe efectuarse en respuesta al ataque en curso con miras a repelerlo.¹² En el supuesto en estudio este requisito se habría verificado en el caso de que en el momento en que se producía el bombardeo de los buques norteamericanos, unidades de este Estado hubieran respondido con miras a rechazarlo. En cambio, las medidas ejercidas por los Estados Unidos se desencadenan a las 48 horas del último de los ataques contra un buque de su pabellón. Tal lapso temporal impide retener como acción inmediata la operación norteamericana, con lo cual es preciso rechazar el argumento de la legítima defensa.

2. Argumento de las represalias

Más correcta aparece la conceptualización de la acción como medida de represalia, constituyendo la respuesta de un Estado a la violación por otro Estado de una obligación internacional. Irán habría cometido un acto ilícito, lo que justificaría la comisión por los Estados Unidos de otro acto ilícito en respuesta a aquél. La respuesta hasta aquí resultaría satisfactoria; sin embargo, hemos de retener el dato de que ambas acciones entrañaban el empleo de la fuerza. Por otro lado,

se estima que las represalias armadas han sido proscritas por el Derecho internacional contemporáneo.

Por estas razones, la consideración de este argumento aducido por los Estados Unidos requerirá el que examinemos el tratamiento tradicional que la doctrina confiere a esta cuestión, analizando posteriormente posibles indicios de una evolución en su tratamiento, para concluir con un examen de la acción norteamericana a la luz del Derecho efectivamente vigente en lo que atiene a las represalias armadas.

A) Planteamiento tradicional del tema

«Las represalias constituyeron, entre las dos guerras mundiales, el objeto de numerosos estudios de Derecho internacional público. La práctica seguida por los Estados beligerantes en el curso de la guerra de 1914-1918, el problema de la compatibilidad de las represalias con el nuevo orden jurídico surgido del Pacto de la Sociedad de Naciones explica el interés que la cuestión de las represalias debía de suscitar en la literatura del Derecho de Gentes. Produciendo las mismas causas los mismos efectos, habría sido de esperar que las represalias conocieran, tras la Segunda Guerra mundial y el intento de organización de la sociedad internacional por la Carta de las Naciones Unidas, un renovado favor ante la doctrina. No ha sido así y podemos a justo título interrogarnos acerca de las razones por las cuales los autores rodean la cuestión de las represalias de un silencio que nada a priori parece justificar».¹³ Con estas palabras J.C. VENEZIA ponía de manifiesto en 1960 las lagunas en la doctrina iusinternacionalista en lo referente a la cuestión de las represalias. Hoy, a casi treinta años de aquellas palabras, aunque contamos con alguna monografía valiosa sobre las represalias en tiempo de guerra,¹⁴ siguen adoleciendo las represalias en tiempo de paz de la atención que les corresponde.

«Al considerar las represalias debe repararse en que existe una profunda diferencia entre dos tipos de medidas, las cuales reciben ambas la denominación de represalias, pero que tienen poco en común. Las represalias son en un primer supuesto reacciones lícitas de un Estado contra actos ilícitos cometidos por otro Estado, y de éstos reciben su justificación. En el segundo supuesto, las represalias son actos de venganza de un Estado ocupante en tiempo de guerra dirigidos contra la población del territorio ocupado por actos de resistencia perpetrados por ésta».¹⁵ Las primeras son las represalias en tiempo de paz, las segundas son las represalias en tiempo de guerra («belligerent reprisals»). En las presentes líneas nos ocuparemos de las aludidas en primer término, las cuales han sido definidas como: «medidas coercitivas derogatorias de las reglas ordinarias del Derecho internacional, adoptadas por un Estado en respuesta a actos ilícitos cometidos en su perjuicio por otro Estado y tendentes a imponer a éste el respeto del Derecho».¹⁶ Dos han sido las finalidades atribuidas a los actos de represalia: de un lado, el constituir una medida de presión con miras a obtener del Estado que delinque la reparación del acto ilícito cometido; de otro, se persigue amedrentar al Estado infractor de modo que en lo sucesivo se abstenga de tales conductas, ya en perjuicio del Estado afectado, ya de cualquier otro Estado. Por esta razón se ha hablado de una doble naturaleza de la represalia: privada¹⁷ (en tanto que referida al interés del Estado perjudicado) y pública (por razón del interés de la comunidad internacional en el general respeto y cumplimiento del Derecho).¹⁸

Dentro de las represalias en tiempo de paz, se solía efectuar la distinción entre las represalias pacíficas y las represalias armadas. Sin embargo, a raíz de la Carta de las Naciones Unidas un sector mayoritario de la doctrina ha entendido proscrita por la misma el recurso a estas últimas. Esta afirmación aún hoy goza de general aceptación.¹⁹ Como recuerda R. BARSOTTI «Conforme a la más extensamente aceptada interpretación, la Carta de las Naciones Unidas —y en particular la prohibición general de la amenaza o el uso de la fuerza contenida en el artículo 2.4— ha hecho ilegales las represalias armadas». ²⁰ Por otra parte se ha entendido que el mismo Tribunal Internacional de Justicia ha declarado su inadmisibilidad en temprana ocasión.²¹ La afirmación de que las represalias armadas están prohibidas por el Derecho internacional ha recibido considerable apoyo con la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a los «principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas», de 24 de octubre de 1970. En efecto, en la misma se recoge un párrafo del siguiente tenor:

«Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza».

Con posterioridad, aún al margen del sistema de las Naciones Unidas pueden advertirse manifestaciones de la existencia de una extendida convicción sobre la ilicitud de las represalias armadas. Un ejemplo particularmente significativo de ello es el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en la cual se declara:

«Estos (los Estados participantes) se abstendrán asimismo en sus relaciones mutuas de cualquier acto de represalia por medio de la fuerza». ²²

Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha condenado las medidas de represalia armada en reiteradas ocasiones. H. THIERRY cita entre otras las Resoluciones de 13 de enero de 1956, 262 de 1968, 265 y 270 de 1969 y en particular la Resolución de 3 de abril de 1964 en la que «El Consejo de Seguridad condena las represalias como incompatibles con los fines y los principios de las Naciones Unidas». ²³⁻²⁴ En apoyo a toda esta serie de condenas que reseñamos la propia Comisión de Derecho Internacional, en su informe de 1979 a la Asamblea General sobre la labor realizada en su trigésimo primer período de sesiones, en su capítulo III, relativo a la responsabilidad de los Estados, afirmaba lo siguiente:

«Después de la Segunda Guerra mundial y de resultados de la afirmación definitiva, como principio fundamental del derecho internacional contemporáneo, de la prohibición del recurso a la fuerza, la *opinio juris* de los Estados acerca de la legitimidad de las represalias ha representado la culminación de una evolución, progresivamente discernible en relación con las sucesivas etapas de la aceptación de dicho principio fundamental. Así pues, esa *opinio* ha pasado a ser indudablemente mucho más restrictiva. En las Naciones Unidas se discutió en repetidas ocasiones la legitimidad internacional de ciertas acciones ejecutadas a título de represalias, precisamente cuando esas acciones implicaban, en aquel caso concreto, el uso de la fuerza armada. La evo-

lución de la convicción jurídica de los Estados en esta materia cristalizó oficialmente en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en la que se proclama (primer principio) que "Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza". Por consiguiente, ningún Estado víctima de la violación de una obligación internacional puede ya reaccionar legítimamente mediante el empleo de represalias armadas contra el Estado autor de la violación, ya que el derecho internacional prohíbe de ahora en adelante a los Estados que ejerzan por sí mismos individualmente represalias que impliquen el empleo de fuerza armada contra otros Estados.²⁵

Sin embargo, en el plano doctrinal nunca se ha producido la unanimidad en su rechazo. Así ha habido autores que han eludido pronunciarse acerca de la posible ilicitud de las represalias armadas en el Derecho internacional actual. CH. ROUSSEAU aun advirtiendo que se plantea el problema de su licitud a la luz del derecho de la Carta, elude pronunciarse al respecto;²⁶ J.C. VENEZIA,²⁷ H. THIERRY,²⁸ N. QUOC-DINH,²⁹ actúan en idéntico sentido. No debe olvidarse aquí que el propio principio que prohíbe el uso de la fuerza cuenta con detractores que han negado absolutamente su valor en momentos recientes.³⁰ En otro momento, ciertos autores mostraron una actitud proclive a la admisión de esta institución, si bien sometiéndola en contrapartida a ciertos requisitos. Así autores como G. SCHWARZENBERGER o R.A. FALK, justificaron las medidas de represalia armada, amparándose en la ineficiencia de los mecanismos de seguridad colectiva previstos en la Carta de las Naciones Unidas.³¹ Entre nosotros, A. RODRÍGUEZ CARRIÓN admitió esta posibilidad integrándola en un concepto amplio de legítima defensa en el que coexistirían requisitos políticos y jurídicos.³² En una línea similar se sitúa K.J. SKUBIZEWSKI para quien aunque «el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas restringió el derecho de los Estados de recurrir a las represalias armadas... se permiten las represalias armadas que se efectúan en defensa propia contra un ataque armado».³³ Este movimiento en pro de la admisibilidad de las represalias armadas, lejos de debilitarse encuentra reflejo en opiniones recientes. Así para J. BARBOZA la adopción de represalias por un Estado encuentra siempre un límite en el hecho de que el empleo de fuerza por el mismo en su ejecución no puede configurar un supuesto de agresión.³⁴ Este dato debe ser puesto de manifiesto, pues los supuestos que comúnmente analizaba la doctrina y acerca de los que hubo de conocer el Consejo de Seguridad comprometían siempre la integridad territorial y la soberanía del Estado contra el que se ejercitaba la represalia, pudiendo hablarse en muchos casos de auténticos actos de agresión.³⁵

B) ¿Un nuevo derecho de represalias armadas?

Llegados a este punto hemos de interrogarnos acerca de si resulta factible encontrar índices para una posible admisibilidad de represalias armadas, lo cual hace necesario delimitar previamente el alcance de la prohibición contenida en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Como ha quedado dicho, la represalia entraña por parte del Estado que la ejerce una violación del Derecho internacional; esa violación se justifica por la previa violación de otro Estado,

pero la infracción permitida en ningún caso puede alcanzar a normas imperativas de Derecho internacional, o lo que es lo mismo, la obligación inobservada por el Estado que reacciona nunca puede ser una obligación «erga omnes» (reverso de la norma imperativa). Hasta aquí se ha entendido que toda violación de la norma que prohíbe el uso de la fuerza constituye una violación de una norma imperativa, y sin embargo, ni todas las conductas que entrañan un uso de la fuerza poseen la misma gravedad, ni suscitan idénticas reacciones de parte de la comunidad internacional. Como advierte B.O. BRYDE «el recurso ocasional a ciertas formas menores de fuerza es especialmente comprensible a la luz de la ineficacia del sistema de cumplimiento forzoso del derecho por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en teoría constituiría el corolario a la prohibición del uso de la fuerza individualmente por los Estados».³⁶ Entre nosotros, A. REMIRO BROTONS sostiene lo razonable de ciertos empleos de fuerza: «El uso de la fuerza para replicar a los usos de la fuerza que no se concretan en un ataque armado y que la sociedad internacional organizada es incapaz de detener y reprimir no puede ser prohibido por el Derecho. Poner la otra mejilla será una actitud evangélica o —más probablemente— la irremediable calamidad de la inferioridad; no ponerla, difícilmente ha de ser considerado antijurídico».³⁷ En sentido coincidente con estas afirmaciones se sostiene hoy que el valor de norma imperativa no puede predicarse de modo absoluto de la norma que prohíbe el uso de la fuerza. Así para R. AGO:

«Se impondría evidentemente una conclusión negativa en cuanto al reconocimiento de esta posibilidad excepcional de exclusión de la ilicitud (se refiere al estado de necesidad, que no podría alegarse para inobservar una norma de "jus cogens") si en la interpretación de la regla de "jus cogens" que prohíbe la agresión se adoptara un concepto que incluyera toda forma de acción cometida por la fuerza en territorio extranjero. Sin embargo, se correría así posiblemente el riesgo de ampliar más allá de lo que es actualmente aceptado por la convicción jurídica de los Estados, ya sea del concepto de agresión o el de norma imperativa de conformidad con los términos del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.»³⁸

C. GUTIÉRREZ ESPADA, interpretando el pensamiento del hoy juez del Tribunal Internacional de Justicia, afirma lo siguiente:

«Lo que el Relator sugiere más bien es que el carácter imperativo no puede predicarse del conjunto de la norma que prohíbe el uso de la fuerza, sino únicamente respecto de la prohibición de sus violaciones más graves, en concreto de la agresión. Es decir, el "ius cogens" vendría a coincidir con el crimen internacional en lo que atañe a la norma citada. Las violaciones de menor entidad no ya es que no serían crímenes sino que tampoco, parece querer decir el Relator, podrían considerarse contrarias al "ius cogens" contemporáneo. Creo que su pensamiento puede interpretarse así sin violencia porque está formulado con suficiente claridad».

Lo que parece inferirse de las opiniones de ambos autores es que la norma que prohíbe el uso de la fuerza carece de una naturaleza única. En un determinado espectro la norma es imperativa (así la prohibición de la agresión, y de ahí

su configuración como crimen internacional en el artículo 19 de la primera parte del proyecto sobre responsabilidad de los Estados},⁴⁰ sin embargo no tendría tal carácter en supuestos de usos de la fuerza distintos de la agresión o «usos menores de la fuerza». Estos supuestos de menor gravedad comprometiendo uso de la fuerza han sido considerados por el Tribunal Internacional de Justicia en el Asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ésta [sentencia de 27 de junio de 1986:

«Sin embargo, tales actividades pueden perfectamente constituir una infracción del principio de prohibición del uso de la fuerza así como una intervención en los asuntos internos de un Estado, es decir, *un comportamiento ciertamente ilícito, pero de menor gravedad que el ataque armado*».⁴¹

De todo lo expuesto puede colegirse que la actitud «maximalista»⁴² que pretendía ver en todo empleo ilícito de fuerza entre Estados una violación de normas imperativas, sufre desde ahora un serio quebranto. El siguiente paso sería preguntarse: si no todo empleo de la fuerza, aun constituyendo un ilícito, supone violación de una norma imperativa de Derecho internacional ¿por qué ha de considerarse que todo tipo de represalia implicando el uso de la fuerza ha de conceputarse de ilícito?

De conformidad con lo expuesto se infiere sin sombra de duda que una medida de represalia que pudiera caracterizarse como un acto de agresión sí estaría prohibida por el ordenamiento internacional por violación de una norma imperativa, pero para el supuesto de represalias armadas no constitutivas de agresión la respuesta no puede ya ser la misma. El actual Relator Especial en la materia de responsabilidad de los Estados por hechos prohibidos por el Derecho internacional en la CDI, Sr. RIPHAGEN, ha advertido esta circunstancia:

«Fuera como fuese, en virtud de su apartado *b* del artículo 12, en la forma propuesta, la suspensión del cumplimiento de obligaciones por vía de represalia no sería posible si la obligación emanaba de una norma imperativa de derecho internacional general. Si se decidía que existía una norma de esta naturaleza que prohibía todas las formas de represalias armadas en todos los supuestos, este aspecto se regiría por esa norma. Pero aun en el caso de que no se admitiera esa prohibición general en todos los supuestos, las represalias seguirían estando sujetas a la norma propuesta en el párrafo 2 del artículo 9, según la cual el ejercicio de ese derecho de represalias no debía ser, en sus efectos, manifiestamente desproporcionado a la gravedad del hecho internacionalmente ilícito cometido».⁴³

Bien es cierto que las opiniones corresponden al actual Relator Especial, pero en todo caso, ¿no resulta sorprendente que en las mismas se sometan a duda lo que en el informe de 1979 se exponía como incuestionable? Es evidente, en todo caso, que las reservas actuales encuentran su base en la doble naturaleza de la norma que advertía R. AGO en su informe de 1980, pues no de otro modo se puede interpretar la explicación del Sr. RIPHAGEN:

«... el Relator Especial expuso la opinión de que los derechos y obligaciones de los Estados en derecho internacional podían considerarse como una serie de tres círculos concéntricos: el círculo exterior representaba el régimen de

la agresión y la legítima defensa, el círculo central representaba el régimen de los hechos, internacionalmente ilícitos y las respuestas a esos hechos y el círculo interior representaba el régimen de la prevención y la indemnización respecto de los actos no prohibidos por el derecho internacional...».⁴⁴

Creo que la referencia a la Comisión de Derecho Internacional puede dejar claro que lo que antes parecía inequívoco, ahora no lo es tanto. Sin embargo, se ha sostenido que el propio Tribunal Internacional de Justicia ha reafirmado recentísimamente la ilicitud de las represalias armadas.⁴⁵ De ser cierto este pronunciamiento de la Corte en el Asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ésta (sentencia de 27 de junio de 1986), el contenido de estas líneas carecería de sentido. Pero veamos que es lo que ha dicho el T.I.J. al respecto:

«El Tribunal, al ocuparse aquí de una controversia en la que se ha alegado un uso ilícito de la fuerza, debe preguntarse ante todo si un Estado posee un derecho de responder a la intervención por la intervención que llegaría hasta justificar el uso de la fuerza en reacción a medidas que, sin constituir un ataque armado, podrían entrañar el empleo de la fuerza. La cuestión en sí misma es incontestablemente pertinente desde un punto de vista teórico. Pero el Tribunal, no debiendo pronunciarse más que sobre los puntos de derecho necesarios para el arreglo de la controversia que le ha sido sometida, no debe decidir las reacciones directas a las que puede lícitamente librarse un Estado que se juzgue víctima, por parte de otro, de actos de intervención comportando eventualmente el uso de la fuerza. Por tanto, no ha de determinar si, en la eventualidad de que Nicaragua hubiese cometido tales actos respecto de El Salvador, éste podría lícitamente adoptar contramedidas particulares...».⁴⁶

Como puede advertirse, el Tribunal evita pronunciarse acerca de la naturaleza que pudieran revestir las eventuales contramedidas a adoptar por un Estado perjudicado ante la violación de una obligación internacional, y en concreto la que prohíbe el empleo de la fuerza. Una elusión y no una condena es lo que advertimos.⁴⁷ Bien es cierto que el Tribunal condena las medidas adoptadas por Estados Unidos implicando uso de la fuerza, pero la «ratio essendi» de su rechazo es diversa:

«... Los hechos reprochados a Nicaragua, de suponer que incluso hubieran sido establecidos y que le fueran imputables, no habrían podido justificar contramedidas proporcionadas más que de parte del Estado que hubiera sido víctima, es decir, El Salvador, Honduras o Costa Rica. No podrían justificar contramedidas adoptadas por un tercer Estado, los Estados Unidos, y en particular una intervención implicando el uso de la fuerza.»⁴⁸

Como puede advertirse lo que rechaza el T.I.J. es la posibilidad de ejercicio de represalias por un tercer Estado o en la terminología del Tribunal «contramedidas colectivas».⁴⁹ (En su razonamiento, afirmada la existencia en derecho consuetudinario de un derecho de legítima defensa colectiva —no susceptible de ser aplicado al caso—, se cuestiona si existe en paralelo con aquél un derecho de

contramedidas colectivas. El Tribunal rechaza esta posibilidad.) La condena de los Estados Unidos, así, se funda en la ilicitud de su acción, que carece de apoyo en el derecho existente, agravada por el empleo de la fuerza.

De todo lo expuesto se desprende que la postura contraria a la admisibilidad de cierto género de represalias armadas no goza de la firme posición que se le atribuía. Ahora bien, hemos de responder a una última cuestión ¿qué requisitos han de concurrir en la acción de represalia armada para que la misma pueda ser calificada de lícita a la luz del Derecho internacional vigente?

1) El Estado que ejerce la represalia debe haber previamente intentado otras vías en orden a la satisfacción de su interés vulnerado. Este principio, acuñado por la jurisprudencia arbitral en el Asunto de Naulilaa,⁵⁰ encontraría hoy su fundamento en la obligación que todos los Estados tienen de resolver sus controversias por medios pacíficos, conforme dispone el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas.

2) Los actos adoptados en represalia no pueden llegar a configurar el tipo de la agresión. Sólo pueden subsumirse en la categoría de las represalias armadas lícitas aquellas medidas que entrañen usos menores de la fuerza. La razón de este requisito de índole negativa va de suyo; la agresión es una violación del espectro imperativo de la norma que prohíbe el uso de la fuerza, y una norma imperativa no admite ningún género de excepción.

3) A efectos de calificar como lícita una represalia armada deberá asimismo tomarse en consideración el requisito de la proporcionalidad —como se establece en el artículo 9 del proyecto de artículos sobre responsabilidad elaborado por W. RIPHAGEN—.⁵¹ Este requisito, enunciado también de forma negativa (no deberá haber manifiesta desproporción entre la violación y la acción en respuesta), regiría en dos ámbitos: de un lado, respecto de la norma violada, cualquier violación del Derecho internacional no daría lugar a un derecho de represalia armada, debería tratarse de una violación de la norma que prohíbe el uso de la fuerza acomodándose la acción en respuesta a la prohibición de agresión referida en el párrafo anterior. Por otro lado, la proporcionalidad regiría también en orden a los efectos, de modo que los daños que pudieran derivarse de la acción en represalia no habrían de exceder manifiestamente de aquellos producidos por la actuación contra la que se responde.

A la luz de estos requisitos podemos intentar analizar la acción norteamericana. Esta se concibe en respuesta al previo ataque armado por Irán de dos buques «norteamericanos».⁵² Con anterioridad al ejercicio de la acción en represalia debería haberse intentado una vía pacífica de arreglo; sin embargo, no consta que tal se haya producido. No parece, no obstante, que haya de concluirse por ello con la ilicitud de la acción si se repara en el dato de que desde el 1 de mayo de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1985 han sido atacados en la zona del Golfo Pérsico 152 buques⁵³ y la cifra ha aumentado ostensiblemente en el periodo no computado. Ante esta situación, ¿cabe exigir un previa tentativa de arreglo? Nos inclinamos a pensar que en estas circunstancias este primer requisito decae. Por lo que hace al requisito de no integrar el tipo de la agresión ¿puede conceptuarse el ataque norteamericano de tal? Si reparamos «ad exemplum» en los supuestos que caracteriza como agresión la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, definidora de la agresión, advertiremos que la acción norteamericana no es subsumible en ninguno de los supuestos allí contemplados. El ataque desencadenado contra las plataformas se produce en un espacio marítimo en que se aplica la libertad de navegación,⁵⁵ y como afirma P. REU-

TER, «sería dudoso que un acto de fuerza dirigido contra un objeto material situado bajo la responsabilidad de un Estado constituya un acto de agresión».⁵⁶ Por último, en lo que respecta al requisito de la proporcionalidad advertimos, que de un lado, a un acto de fuerza se ha respondido con otro acto de fuerza; de otro, que —a reserva de que carecemos de datos precisos sobre la entidad de los mismo— no parece que se hayan producido víctimas, no resultando manifiestamente desproporcionada la destrucción de las plataformas (inactivas e inutilizadas desde un ataque iraquí producido en el año 1986) en relación a los dos buques dañados.⁵⁷ Con base en el presente análisis, ¿se situaría la acción norteamericana dentro de los márgenes de las represalias armadas presuntamente admisibles por el Derecho internacional? La escasez de datos hacen imposible emitir un juicio certero, pero la falta de reacciones en contrario en el seno de la comunidad internacional son indicio de una respuesta favorable.

III. CONCLUSIONES

Del conjunto de nuestro análisis se obtienen las siguientes conclusiones:

1) El argumento avanzado inicialmente configurando a la acción norteamericana como ejercicio del derecho de legítima defensa resulta en todo punto insostenible, por razón de no concurrir los requisitos —en concreto el de inmediatez de la acción— exigidos por nuestro ordenamiento para autorizar una acción en ejercicio de ese derecho.

2) En lo que respecta al argumento de las represalias, si bien un sector importante de la doctrina entiende inadmisibles las represalias entrañando un uso de la fuerza, se detectan indicios de una cierta admisibilidad de cierto género de acciones entrañando usos menores de la fuerza —en concreto no integrando el tipo de la agresión—, por lo que, acaso, pueda hablarse de cierto género de represalias armadas lícitas a la luz del Derecho internacional. En este supuesto, la acción norteamericana no constituiría una violación del Derecho internacional.

3) La apuntada reviviscencia de cierto género de represalias armadas puede conceptuarse de fenómeno contradictorio. D.W. BOWETT en 1972, analizando la práctica de los Estados en materia de represalias económicas, aventuraba el progresivo incremento de éstas en el futuro.⁵⁸ La crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, la invasión de Afganistán, la guerra de las Malvinas... entre otros supuestos, pusieron de manifiesto lo acertado de las predicciones de este autor, a la vez que ponían de relieve sus peligros. CH. LEBEN estudiando esa práctica advertía cómo las contramedidas económicas se revelaban «medios coercitivos de una sociedad descentralizada que sólo podrían surtir su eficacia en una sociedad centralizada», caracterizándolas como «armas de doble filo», por sus efectos negativos para el Estado que las adoptaba.⁵⁹ La emergencia de cierto género de represalias armadas, en este contexto, ¿no podría considerarse la vuelta a medios más brutales, pero cuando menos, más efectivos de reacción al ilícito? Por otro lado, la recuperación de esta institución ¿no podría constituir la tímida manifestación de un fenómeno de mayor envergadura cual sería una nueva delimitación del principio que prohíbe el empleo de la fuerza, a más de cuarenta años de su proclamación por la Carta de las Naciones Unidas? Indicios de este Derecho emergente ya fueron puestos de manifiesto por W. WENGLER en 1971.⁶⁰ El mismo trataría de dar respuesta a la crónica ineficacia de los órganos a los que se había encomendado el mantenimiento de la paz y la seguridad inter

nacionales.⁶¹ Lo que manifestaría ese nuevo derecho —y por eso tal vez no lo sea tanto— sería la persistencia del carácter descentralizado de la sociedad internacional de nuestros días; en la que el monopolio de la fuerza aún reside en los Estados, y en la que, como observa R.J. DUPUY, «los paliativos a la violencia se basan en la voluntad de los Estados de recurrir a ellos».⁶² Un Derecho, en suma, acomodado a la estructura socio-histórica que le sirve de base y en el que la práctica de los Estados y su convicción jurídica («sus palabras y sus conductas» como dijera G. DE LACHARRIERE) discurren parejas; algo cuya falta siempre ha reprochado el observador atento de las realidades de este sector de problemas del ordenamiento internacional.

NOTAS

1. *El País*, 20 de octubre de 1987; *Time Magazine*, 2 de noviembre de 1987.
2. *El País*, 20 de octubre de 1987.
3. *Time Magazine*, 2 de noviembre de 1987.
4. *El País*, 20 de octubre.
5. *El País*, 21 de octubre.
6. *El País*, 20 de octubre.
7. A. CASSESE, *Il Diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984, p. 260.
8. J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, *Curso de Derecho internacional público*, vol. I, Oviedo, 1983, p. 287.
9. A. REMIRO BROTONS, *Derecho internacional público*, 1. Principios fundamentales, Madrid, 1983, p. 186, para quien «el Estado que se considera atacado ejerce ipso facto, una acción defensiva proporcionada a la naturaleza e intensidad del ataque, la pone inmediatamente en conocimiento del órgano competente y persistente en ella hasta que éste tome las decisiones oportunas», loc. cit.
10. G. MOURSÍ BADR, «The Exculpatory Effect of Self-Defense in State Responsibility», *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 1980, p. 25.
11. H. WALDOCK, «The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law», *R. des C.*, 1952, vol. II, p. 497.
12. G. MOURSÍ BADR, loc. cit.
13. J. C. VENEZIA, «La notion de représailles en Droit international public», *RGDIP*, 1960, pp. 465 y 466.
14. F. KALSHOVEN, *Belligerent Reprisals*, Leyden, 1971.
15. J.H.W. VERZIJL, *International Law in historical perspective*, vol. VIII, Leyden, 1976, pp. 37 y 38.
16. CH. ROUSSEAU, *Précis de Droit international public*, Paris, 1979, p. 343.
17. Naturaleza privada que conviene discernir de la represalia privada o «droit de marque», figura primitiva de esta institución, «la cual contribuyó a engendrar la noción de responsabilidad jurídica por violaciones del Derecho internacional», I. BROWNIE, «The History of State Responsibility», *Essays in honour of Wolfgang Abendroth*, Frankfurt am Main, 1982, p. 22.
18. J. BARBOZA, «Necessity (revisited) in International Law», *Essays in International Law in honour of Judge Manfred Lachs*, La Haya, 1984, p. 37, n. 19.
19. Sin ánimo de ser exhaustivos la postura contraria a la admisión de las represalias armadas es compartida por sinnúmero de autores, entre otros: J.A. CARRILLO SALCEDO, *El Derecho internacional en un mundo en cambio*, Madrid, 1984, pp. 154 y 155; A. CASSESE, op. cit., que en el Derecho actual sólo menciona las represalias pacíficas p. 270; G. GARZÓN CLARIANA, en M. DIEZ DE VELASCO, *Instituciones de Derecho internacional público*, vol. I, Madrid, 1985, p. 612; J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, *Curso de Derecho internacional público*, Madrid, 1983, p. 316, con una opinión sumamente restrictiva, insinuando la posible ilicitud, incluso de las represalias económicas; D.W. GREIG, *International Law*, Londres, 1976, pp. 887-892; C. GUTIÉRREZ ESPADA, *El Estado de necesidad y el uso de la fuerza en Derecho internacional público*, Madrid, 1987, pp. 128 a 131; S.C. KHARE, *Use of Force under United Nations Charter*, Nueva Delhi, 1985, pp. 48 a 54; E. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, «General Course in Public International Law», *R. des C.*, 1978, vol. I, pp. 92 y 93; P. MANIN, *Droit international public*, Paris, 1979, p. 341; P. REUTER, *Derecho internacional público*, Barcelona, 1982, p. 454; D. RUZIE, *Droit international public*, Paris, 1980, p. 131; CH. DE VISSCHER, *Théories et réalités en Droit international public*, Paris, 1970, pp. 131 a 334; A. VERDROSS y B. SIMMA, *Universelles Völkerrecht, Theorie und Praxis*, Berlin, 1976, pp. 244-245 y 652-654.
20. R. BARSOTTI, «Armed Reprisals», en A. CASSESE (ed.), *The current legal regulation of the use of force*, Dordrecht, 1986, p. 79.
21. En el Asunto del Estrecho de Corfú (1949). «Aunque el Tribunal no hubo de pronunciarse directamente al respecto [de la licitud de las represalias armadas]. Se advierte claramente de su decisión que en lo sucesivo, en Derecho internacional general, el principio de las represalias no podría ser invocado como justificación en caso de una violación territorial armada», R.J. WILHELM, «La réalisation du droit par la force ou la menace des armes», *ASDI*, vol. XV, 1958, p. 106.
22. R. BARSOTTI, op. cit., p. 81.
23. H. THIERRY en H. THIERRY, S. SUR, J. COMBACAU y CH. VALLÉE, *Droit international public*, Paris, 1981, p. 508.
24. D.W. BOWETT ha analizado la práctica del Consejo de Seguridad a lo largo de las sucesivas resoluciones, poniendo de manifiesto cómo en ocasiones el Consejo no adoptaba resoluciones condenatorias en base a lo «razonable de la acción», «Reprisals involving recourse to armed force», *AJIL*, vol. 66, 1972, pp. 1 a 36; Por su parte, K.J. PARTSCH califica a la práctica de «ambigua», «Self-Preservation», en R. BERNHARDT (ed.), *Encyclopaedia of Public International Law*, vol. 4, Amsterdam, 1982, p. 219; en otro lugar, advierte que el Consejo «no en todos los casos ha aplicado el principio

de que las represalias armadas están prohibidas en tiempo de paz», «Reprisals», en *id. op. cit.*, vol. 9, Amsterdam, 1986, p. 332.

25. *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, 2ª parte, p. 141.

26. «El problema de su licitud se plantea necesariamente en el primer caso (las represalias armadas), desde el momento en que el derecho convencional (Pacto de la Sociedad de Naciones, Pacto Kellogg, Carta de las Naciones Unidas) ha prohibido en todo o en su parte el recurso a la fuerza», *op. cit.*, p. 343.

27. Para quien aunque «no cabe sino constatar que las represalias armadas no tienen ya cabida en el ordenamiento jurídico internacional instituido por la Carta», la conclusión es que los Estados recurren a éstas, y siquiera su más estricta reglamentación es ya un progreso del ordenamiento internacional, *op. cit.*, 494 y 498.

28. Este autor, tras hacer mención de la frecuente práctica de las represalias evita todo juicio al respecto, *op. cit.*, p. 508.

29. Para este autor, cuyo escepticismo respecto de las previsiones de la Carta en materia de prohibición de uso de la fuerza era patente en tiempo temprano, [así cfr. «La légitime défense d'après la Charte des Nations Unies», *RGDI*, 1948, pp. 223 a 254] la consideración de las represalias armadas hacia caso omiso de los posibles desarrollos del derecho de la Carta, así en su *Droit international public*, Paris, 1975, pp. 730 y 731; si bien en sucesivas ediciones se modifica su opinión hasta llegar a la tercera edición (Paris, 1987, pp. 824 y 825) en que se afirma su ilicitud «pero con los mismos límites y las mismas incertidumbres que en la hipótesis general del recurso a la fuerza armada», p. 825, este cambio de criterio se debe a sus anotadores P. DAILLIER y A. PELLET.

30. K. MAREK, «Sur la notion de progrès en Droit international», *ASDI*, vol. XXXVIII, 1982, pp. 36 a 38; para quien ni en el plano consuetudinario, ni en el convencional se encuentran fundamentos para afirmar la vigencia de la norma, «a riesgo de atraer sobre nosotros todos los rayos, afirmamos que tal regla no existe», p. 36 «in fines».

31. G. SCHWARZENBERGER, *A Manual of International Law*, Londres, 1967, pp. 184 a 186; R.A. FALK, «The Beirut Raid and the International Law of Retaliation», *AJIL*, 1969, pp. 415 a 443.

32. *Uso de la fuerza por los Estados*, Málaga, 1974, pp. 206 a 209. Su posición actual puede calificarse de ambigua. Así examinando el contenido del artículo 30 del proyecto de la CDI sobre responsabilidad (relativo a las contramedidas) no se pronuncia respecto de las represalias armadas. *Lecciones de Derecho internacional público, I. Estructura del Derecho internacional*, Málaga, 1984, p. 301.

33. «Uso de la fuerza por parte de los Estados. Seguridad colectiva. Derecho de Guerra y Neutralidad», en M. SORENSEN (ed.), *Manual de Derecho internacional público*, México, 1973, p. 693. H. THIERRY pone de relieve lo aparentemente contradictorio del pensamiento de este autor, pues «parece, sin embargo, que la noción de represalias implica una acción punitiva en respuesta a un acto ilegítimo ya concluido, en tanto que la legítima defensa se aplica a una acción en curso que se pretende detener o repeler», *op. cit.*, p. 508.

34. *op. cit.*, p. 38.

35. Un exhaustivo análisis y amplio elenco de supuestos de la práctica en D.W. BOWETT, *op. cit.*, sobre las «represalias israelíes» que constituyeron el «case study» por antonomasia de la doctrina: R.A. FALK, *op. cit.*, W.T. CLARK, «The Beirut Retaliation. A case study of the use of force in time of peace», *New York University Journal of International Law and Politics*, 1969, pp. 105 a 131.

36. «Self-Help», en R. BERNHARDT (ed.), *Encyclopaedia of Public International Law*, vol. 4, Amsterdam, 1982, p. 217.

37. *op. cit.*, p. 189.

38. «Adición al octavo informe sobre la responsabilidad de los Estados», *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, 1ª parte, 1980, p. 44, párr. 59.

39. *op. cit.*, p. 76.

40. cfr. el texto del artículo en *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, 2ª parte, 1979, p. 110.

41. *C.I.J. Recueil*, 1986, p. 127, párr. 247.

42. Empleo la expresión de K. MAREK, *op. cit.*, p. 39.

43. *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, 2ª parte, 1984, pp. 106 y 107, párr. 362.

44. *id. loc. cit.*, p. 106, párr. 360.

45. C. GUTIÉRREZ ESPADA, *op. cit.*, p. 130.

46. *C.I.J. Recueil*, 1986, p. 110, párr. 210.

47. El evitar un pronunciamiento sobre la cuestión es tanto más evidente, si se repara en la opinión individual del presidente del Tribunal, Sr. Nagendra SING.

«De hecho, este principio capital del no empleo de la fuerza en las relaciones internacionales se sitúa en el centro de la doctrina consagrada por el tiempo que se ha desarrollado a lo largo de este siglo, más particularmente tras las dos guerras mundiales. Este principio fue entonces deliberadamente extendido a la ilicitud del recurso a las represalias armadas o a otras formas de intervención armada

distintas de la guerra... El razonamiento que sostenía la extensión del principio de la prohibición del empleo de la fuerza a las represalias era el siguiente: si se aceptaba el empleo de la fuerza, no como una medida limitada y restringida de legítima defensa, sino también, como respuesta a provocaciones menores, precisadas de contramedidas, llegaría el día en que el mundo conocería una tercera guerra mundial —catástrofe tan temida en 1946 que justificó medidas concretas e inmediatas destinadas a alejar la amenaza.» (CJF Recueil, 1986, p. 151).

Una interpretación también distorsionada del sentido de la Sentencia pudo advertirse en P. DALLIER y A. PELLET, en N. QUOC-DINH, *Droit international public*, París, 1987, p. 825.

48. CJF Recueil, 1986, p. 127, párr. 249.

49. «La expresión "contramedidas" constituye un neologismo en el vocabulario del derecho internacional. Con anterioridad, no se hablaba de "contramedidas". Este término ha aparecido, de un lado, en la sentencia arbitral de 9 de diciembre de 1978 (Francia-Estados Unidos) en el asunto conocido como "la ruptura de carga en materia de tráfico aéreo", y de otro lado, en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado...» E. ZOLLER, «Quelques réflexions sur les contre-mesures en Droit international public», *Etudes offertes à Claude-Albert Colliard*, París, 1984, p. 361.

50. *Un Report of Arbitral Awards*, vol. II, p. 1025 y ss.

51. *Anuario de la Comisión de Derecho internacional*, vol. II, 2ª parte, pp. 104 y 105. El contenido es el siguiente:

Artículo 9...

2. El ejercicio de ese derecho por el Estado lesionado no deberá ser, en sus efectos, manifiestamente desproporcionado a la gravedad del hecho internacionalmente ilícito cometido.»

52. Se trataba de los buques «Sea Isle City» y «Sungari». El primero era un petrolero inicialmente kuwaití, pero rematriculado recientemente en los Estados Unidos para posibilitar su protección por la Armada USA. El segundo, aunque de propiedad norteamericana, batía pabellón liberiano (*Time Magazine*, 2 de noviembre; *El País*, 20 de octubre). La acción en represalia sólo se encontraría justificada respecto de los daños producidos al primero de ellos, pues en lo relativo a los buques prima la «ley del pabellón», como puso de manifiesto el T.I.J. en el asunto de la Composición del Comité de Seguridad marítima de la Organización Intergubernamental consultiva de la Navegación Marítima, Dictamen consultivo de 8 de junio de 1960 (CJF Recueil, 1960, p. 150 y ss.).

53. CH. ROUSSEAU, «Chronique des faits internationaux», *RGDIP*, 1987, p. 958.

54. La cual pese a su inoperancia en la práctica ha sido considerada por el T.I.J., en algunos extremos, como reflejando el Derecho consuetudinario en la materia en la sentencia de 27 de junio de 1986.

55. El incidente se produce a 75 millas de las costas iraníes. Irán carece de zona económica exclusiva, por lo que el espacio jurídico es el alta mar.

56. *Derecho internacional público*, Barcelona, 1982, p. 451.

57. Según un portavoz de la Casa Blanca: «El carácter limitado del mismo, la precisión en la identificación del objetivo, es proporcional al ataque iraní con un misil *Silkworn*» (*El País*, 20 de octubre).

58. D.W. BOWETT, «Economic Coercion and Reprisals by States», *Virginia Journal of International Law*, 1972, p. 12.

59. CH. LEBEN, «Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l'illicite dans la société internationale», *AFDI*, vol. XXVIII, 1982, pp. 69 y ss.

60. W. WENGLER, «L'interdiction de recourir à la force. Problèmes et tendances», *RBDI*, vol. VII, 1971, pp. 449 y 450.

61. Aun manifestándose contrario a la admisión de las represalias armadas, P. MALANCZUK advierte: «de continuar el proceso de deterioro del sistema de la Carta, será sólo cuestión de tiempo el que el empleo de la fuerza en autotutela llegue a ser considerado legítimo, por inevitable», «Counter-measures and Self-Defence as Circumstances Precluding Wrongfulness in the International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility», *ZaöRV*, vol. 43, 1983, p. 735.

62. R.J. DUPUY, *La Communauté internationale entre le mythe et l'histoire*, París, 1986, p. 46.